

Evaluación del Impacto Socioeconómico de la COVID-19 en las Personas Desplazadas por la Fuerza

Resumen Temático Núm. 4: el caso de Costa Rica*

Información clave

- Costa Rica ha experimentado una profunda recesión económica como resultado de la pandemia de COVID-19, sin embargo, sigue dando la bienvenida a aquellos que necesitan protección internacional de toda la región. Desde 2017, el número de personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras personas de interés, principalmente de Nicaragua, aunque también de Venezuela y Cuba, entre otros, ha aumentado considerablemente, lo que ejerce presión sobre los sistemas nacionales.
- Los datos de dos rondas de una encuesta telefónica realizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Innovations for Poverty Action (IPA) entre marzo y agosto de 2021, comparable a una encuesta similar efectuada por el Banco Mundial sobre la población nacional, proporcionan información sobre cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado la salud, los medios de vida y la vulnerabilidad general de estas poblaciones que son personas de interés (PoC, por sus siglas en inglés) del ACNUR.¹
- La encuesta revela que, para agosto de 2021, alrededor de uno de cada cinco hogares conformados por personas de interés (PoC) sufrió COVID-19. Además, el 36% de las personas encuestadas reporta haberse vacunado, y cerca del 80% cree que las vacunas son seguras y efectivas.
- El impacto económico de la pandemia ha sido severo para los hogares de las PoC, con casi 3 de cada 4 personas encuestadas que reportaron ingresos familiares más bajos en la primera ronda en comparación con la situación previa a la COVID-19. Además, la inseguridad financiera de las PoC continúa siendo pronunciada con un 70% de las personas encuestadas que se vieron obligadas a agotar sus ahorros o depender de otros para satisfacer las necesidades diarias, y con la mitad que reportó no tener cuentas de ahorro bancarias o móviles.
- La inseguridad alimentaria sigue siendo alta – a pesar de haber disminuido durante las rondas de las encuestas – el 61% de las personas encuestadas en la segunda ronda reportó que un adulto se saltó una comida en la última semana en comparación con solo el 12% de los nacionales en la ronda final de la encuesta del Banco Mundial. La población nicaragüense en particular se enfrenta a altos niveles de vulnerabilidad alimentaria, ya que 4 de cada 10 personas encuestadas nicaragüenses reportan que una niña o niño ha pasado hambre en los últimos 30 días.
- A pesar de estas necesidades prevalecientes, la ayuda alimentaria y en efectivo a las PoC se redujo entre marzo y agosto de 2021. Del mismo modo, las solicitudes de apoyo del gobierno son menos comunes en la segunda ronda, y alrededor de 40% de las solicitudes de asistencia son rechazadas.
- La población venezolana se encuentra en mejores condiciones en comparación con los hogares nicaragüenses y cubanos según lo evidencia la mayoría de las medidas estadísticas. Estos resultados probablemente reflejan su mejor perfil socioeconómico preexistente y la capacidad asociada para integrarse en la sociedad costarricense.

*Este informe fue elaborado de manera conjunta por Craig Loschmann, Theresa Beltramo y Jed Fix del ACNUR. Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del ACNUR.

¹ El término 'personas de interés' (PoC, por sus siglas en inglés) del ACNUR incluye, por lo general, a las personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, apátridas y otras en situación similar a la de las personas refugiadas, como los venezolanos desplazados en el extranjero.

La pandemia de COVID-19 ha tenido consecuencias devastadoras en todo el mundo. En los países de ingresos bajos y medios donde vive la mayoría de las personas refugiadas, la pandemia ha aumentado la carga de los gobiernos de acogida y las partes interesadas que trabajan con ellos para abordar los niveles sin precedentes de desplazamiento forzado.² Si bien el virus en sí no discrimina, se cree que sus impactos socioeconómicos afectan desproporcionadamente a las personas desplazadas por la fuerza debido a sus vulnerabilidades preexistentes y a circunstancias a menudo precarias.

Los estudios realizados por el World Bank-UNHCR Joint Data Center on Forced Displacement (JDC), el Center for Global Development y el Norwegian Refugee Council destacan los graves efectos de la pandemia en las personas desplazadas por la fuerza, muchas de las cuales trabajan en sectores más vulnerables a los *shocks* económicos y con acceso limitado a los mercados laborales formales, los servicios de salud y educación, y los sistemas de protección social.³ A pesar de estos esfuerzos, todavía hay relativamente poca evidencia empírica sobre cómo las personas refugiadas y otras personas de interés del ACNUR se han visto afectadas por la pandemia, particularmente en diversos contextos en las Américas. Esto es aún más relevante teniendo en cuenta que la región de América Latina y el Caribe ha sido posiblemente la más afectada del mundo, con 18.5% de los casos de COVID-19 y 30.3% de las muertes a nivel mundial a octubre de 2021, pese a representar solo el 8.4% del total de la población mundial.⁴

Este informe – [que se suma a otros en la serie](#) – analiza el impacto de la COVID-19 en las personas de interés del ACNUR en Costa Rica a partir de los datos socioeconómicos obtenidos recientemente de una encuesta telefónica de alta frecuencia. Si bien no es exhaustivo, el objetivo es proporcionar evidencia de cómo esta población está enfrentando la crisis en comparación con la población nacional y cómo sus condiciones evolucionan con el tiempo, siempre que sea posible. El estudio se enfoca principalmente en los temas identificados como prioritarios por las operaciones nacionales y regionales del ACNUR, incluyendo el impacto de la pandemia en el acceso a los servicios esenciales, los medios de vida y la inseguridad alimentaria. Sin embargo, en primer lugar, se presenta un breve contexto de las tendencias de desplazamiento en Costa Rica en los últimos años, así como la experiencia general del país con la pandemia y la respuesta operacional del ACNUR.

Desplazamiento, COVID-19 y respuesta de ACNUR en Costa Rica

Costa Rica ha acogido a solicitantes de asilo de América Latina y otras partes del mundo durante décadas, proporcionando documentación y ofreciendo libertad de circulación, derecho al trabajo y acceso a servicios básicos. En consonancia con su marco para la protección e integración de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, el país adoptó el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados – denominado localmente MINARE – como aplicación nacional del Pacto Mundial sobre Refugiados. El MINARE permite a Costa Rica participar en el proceso regional conocido como MIRPS.⁵ Asimismo se involucra activamente en la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) codirigida por el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para responder a la situación de las personas venezolanas desplazadas que viven en Costa Rica. A mediados de 2021, Costa Rica alberga a 184.895 personas de interés, las cuales representan alrededor del 3% de la población nacional, a saber, 10.242 refugiados, 152.525 solicitantes de asilo y 21.766 venezolanos desplazados en el extranjero (gráfico 1).

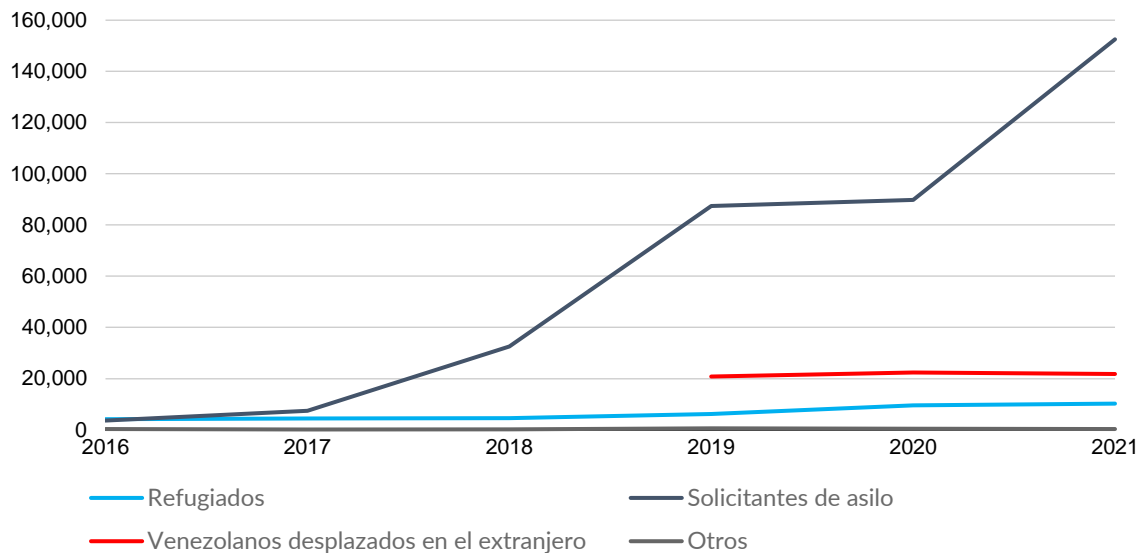
² ACNUR (2021). [Mid-Year Trends. Forced Displacement in 2021](#) (disponible en inglés).

³ Tanner, J., et al. (2021). [Answering the Call: Forcibly Displaced during the Pandemic](#) (disponible en inglés). Dempster, H., et al. (2020). [Locked Down and Left Behind: The Impact of COVID-19 on Refugees' Economic Inclusion](#) (disponible en inglés) y; Gorevan, D. (2020). [Downward Spiral: the economic impact of COVID-19 on refugees and displaced people](#) (disponible en inglés).

⁴ CEPAL y UNICEF (2021). [Pandemia de COVID-19: el derecho a estudiar de las niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe.](#)

⁵ Consultar el [Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones \(MIRPS\)](#) para obtener más detalles.

Gráfico 1 Personas de Interés en Costa Rica



Fuente: ACNUR Refugee Data Finder PopData
© ACNUR.

La afluencia de personas solicitantes de asilo y refugiadas en los últimos años, principalmente de Nicaragua (86%), pero también de Venezuela y de otras partes de la región, incluyendo Cuba, ha sobrecargado los sistemas nacionales de Costa Rica en sectores como la educación, la salud, la protección social y la asistencia jurídica. El alto flujo de llegadas ha excedido la capacidad del gobierno de recibir y procesar casos, causando retrasos significativos en la entrega de documentos y permisos de trabajo para las personas solicitantes de asilo, particularmente en la zona norte a lo largo de la frontera con Nicaragua. A noviembre de 2021, 32.759 solicitudes de asilo estaban pendientes de resolución. Esto ha impedido que las personas de interés se integren plenamente en el mercado laboral y satisfagan sus necesidades básicas, y ha requerido la aplicación de un enfoque por áreas para proponer soluciones humanitarias y orientadas al desarrollo.

El ACNUR presta apoyo a las PoC mediante iniciativas específicas de medios de vida y ayuda en efectivo para fines múltiples. Las iniciativas de medios de vida apoyan el deseo de las personas de lograr la autosuficiencia y la inclusión económica eliminando obstáculos a las actividades generadoras de ingresos mediante el fomento de la capacidad profesional o técnica. El Programa Vivir la Integración, a través de iniciativas como el Sello Vivir la Integración y diferentes acciones en materia de empleo y emprendimiento, desarrolladas por el Gobierno costarricense con ACNUR y agencias socias, apoya a las personas solicitantes de asilo y refugiadas en su integración local mediante la capacitación en habilidades, el acceso a ferias de empleo y la asistencia para iniciar negocios. Cerca de 2.000 personas se han beneficiado de esta iniciativa desde 2014.

En simultáneo, el ACNUR presta asistencia inmediata a las personas de interés más vulnerables mediante intervenciones de ayuda en efectivo para fines múltiples. Estos subsidios en efectivo no condicionados y sin restricciones permiten a las personas y familias priorizadas abordar sus necesidades más críticas. Entre junio y agosto de 2020, se realizaron evaluaciones socioeconómicas en toda la región metropolitana de San José, así como en los cantones norteros de Upala y Los Chiles, lo que dio como resultado que 2.238 hogares recibieran un subsidio mensual en efectivo. Durante tres meses, las familias recibieron 450 dólares estadounidenses en San José y 200 en la región norte. Además del subsidio, las familias recibieron cursos de capacitación financiera, asesoría jurídica y otros servicios de los socios implementadores.

Además, como parte de su respuesta a la pandemia, el ACNUR firmó un convenio con el Gobierno de Costa Rica para proporcionar acceso a la atención médica pública mediante un plan integral de seguro médico para personas solicitantes de asilo y refugiadas. Este convenio juega un papel importante en la integración temprana, ya que las personas recién llegadas a menudo muestran condiciones de salud crónicas desatendidas o derivadas de su viaje. A la fecha, este convenio ha permitido brindar atención a más de 10.000 personas, la mayoría de ellas nicaragüenses. El ACNUR también incide y contribuye a la inclusión de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en las campañas nacionales de vacunación contra COVID-19.

Fuente de los datos

El análisis que se presenta en esta nota se basa principalmente en microdatos a nivel de los hogares obtenidos a partir de una encuesta realizada por el ACNUR e *Innovations for Poverty Action* (IPA). La recopilación de datos se llevó a cabo en dos rondas de encuestas entre marzo y agosto de 2021 utilizando los datos de registro del ACNUR, proGres, como marco de muestreo. Como tal, la muestra puede considerarse representativa de las PoC registradas en el ACNUR, aunque no necesariamente representativa de toda la población desplazada en Costa Rica. Teniendo en cuenta que es más probable que los hogares vulnerables busquen asistencia y, por lo tanto, se registren, es probable que nuestra muestra produzca estimaciones más bajas en relación con el bienestar socioeconómico y, por lo tanto, ayude a nutrir las políticas dirigidas a las personas más necesitadas.

En la primera ronda de la encuesta telefónica, se entrevistó a 1.163 hogares en cuatro estratos distintos previamente identificados por las operaciones del ACNUR en el país que abarcaban la Gran Área Metropolitana (GAM) y la zona de la frontera norte. En la segunda ronda, 761 hogares fueron contactados nuevamente con éxito proporcionando un conjunto de datos de panel para explorar el impacto de la pandemia en esta población vulnerable a lo largo del tiempo.⁶ Entre las PoC originalmente encuestadas se encuentran: 604 nicaragüenses, 333 venezolanas y 226 cubanas, lo que sirve como base para el análisis comparativo entre grupos.

La herramienta de la encuesta fue diseñada de acuerdo con el cuestionario del Banco Mundial para sus [Encuestas Telefónicas de Alta Frecuencia](#) (HFPS, por sus siglas en inglés) que se aplicaron entre las poblaciones nacionales de la región de América Latina y el Caribe. En Costa Rica, el Banco Mundial llevó a cabo una primera fase de las HFPS en tres rondas entre mayo y agosto de 2020⁷, y el Banco Mundial junto con el PNUD realizaron una segunda fase de encuestas entre mayo y julio de 2021.⁸ Si bien las comparaciones directas son limitadas debido al lapso y las restricciones asociadas, las tendencias generales a lo largo del tiempo entre la muestra nacional de las HFPS y la muestra de las personas de interés de este análisis, son informativas y se incluyen cuando corresponde.

Experiencias relacionadas con la salud y acceso a los servicios

Como en todos los países de la región, la pandemia ha provocado graves trastornos en la vida cotidiana de Costa Rica. A diciembre de 2021, el número acumulado de casos oficialmente confirmados es de más de medio millón,

⁶ Todas las estimaciones de la segunda ronda incluyen ponderaciones posteriores a la estratificación para ajustar el desgaste diferencial.

⁷ Consultar la [Biblioteca de Microdatos del Banco Mundial](#) para obtener más detalles.

⁸ PNUD (2021). [Una recuperación desigual: Tomando el pulso de América Latina y el Caribe después de la pandemia.](#)

lo que representa alrededor de 10% de la población total.⁹ En nuestra encuesta telefónica con PoC, alrededor del 20% de los hogares encuestados ha tenido al menos un diagnóstico de COVID-19. Además, el 41% de los hogares recibió al menos una prueba de COVID-19 en el último año, cuya mayoría – 3 de cada 4 personas encuestadas – indicó que era fácil de recibir. Entre aquellas personas que tuvieron dificultades para hacerse una prueba, los problemas más comunes reportados son los tiempos de espera y el costo. En los tres grupos de esta muestra – población venezolana, nicaragüense y cubana – las PoC nicaragüenses son 16 puntos porcentuales (en lo sucesivo “pp”) menos propensas a decir que fueron diagnosticadas a partir de una prueba, lo que probablemente refleja su grado de marginación, relativamente más alto, de los servicios de salud.



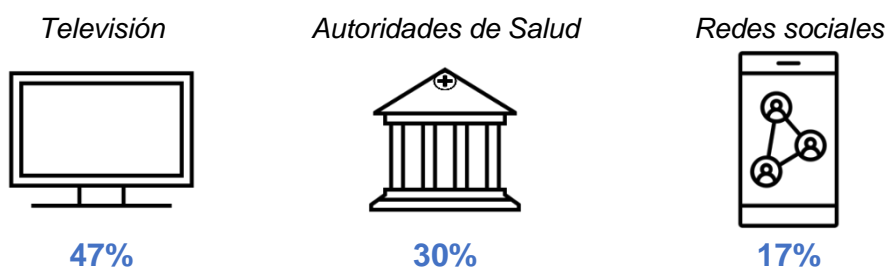
Comportamiento, vacunación y conocimiento sobre COVID-19

En marzo de 2021, casi todas las personas encuestadas reportaron que siempre habían usado cubrebocas al salir de casa y en lugares públicos en los siete días previos a la enumeración. Además, un 83% comenta que evitó grandes concentraciones y multitudes por completo. A modo de comparación, el 95% de las personas encuestadas nacionales mediante las HFPS 2020 del Banco Mundial reportó haber participado en al menos algunas prácticas de mitigación, destacando que no hay diferencias fundamentales entre las personas de interés y las nacionales con respecto a los comportamientos preventivos.

Además, el conocimiento de los encuestados sobre las diferentes medidas de mitigación es consistente en los tres grupos de PoC. Tampoco hay diferencias significativas entre las zonas urbanas (GAM) y rurales (frontera norte), lo que refleja los esfuerzos generalizados para promover la comprensión de la pandemia. En última instancia, aproximadamente la mitad de todas las PoC encuestadas dicen que no sienten que la COVID-19 sea un riesgo para su hogar, principalmente porque siguen las medidas preventivas.

El gráfico 2 ilustra cómo las tres fuentes de información más confiables sobre COVID-19 entre las PoC encuestadas son la televisión, el Ministerio de Salud y las redes sociales. Otras fuentes de información son: el ACNUR (15%), Gobierno nacional (10%), radio (6%), amistades/familiares (6%) y la OMS (3%). En los tres grupos, la población venezolana es más propensa a seguir las redes sociales y fuentes oficiales como el ministro de salud o el Gobierno nacional en relación con los otros dos grupos. Alternativamente, las personas encuestadas provenientes de Cuba reportan que el ACNUR es una fuente confiable de información en mayor proporción que las personas nicaragüenses y venezolanas.

Gráfico 2 Fuentes de información sobre COVID-19 consideradas confiables

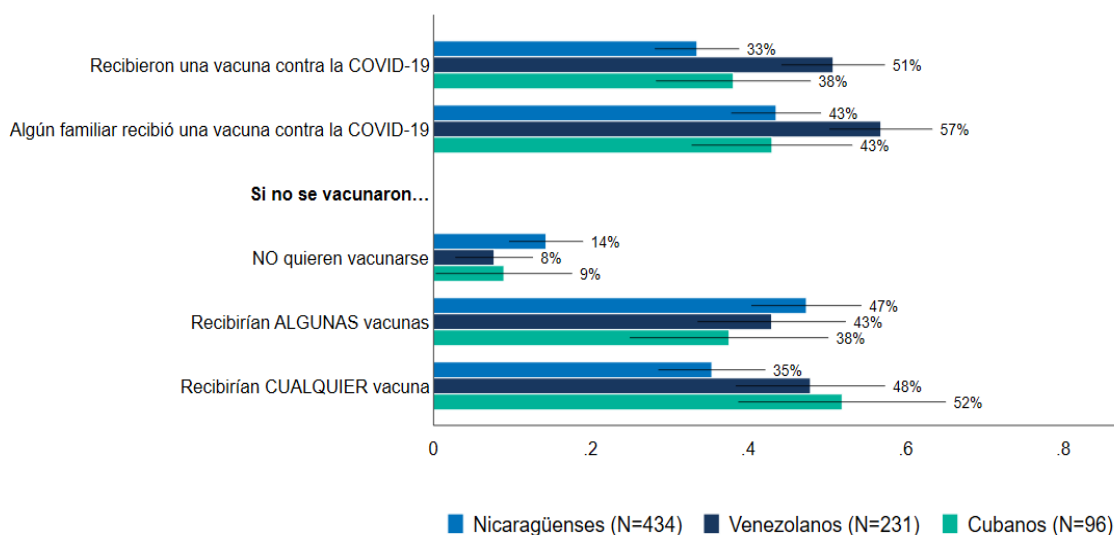


Para agosto de 2021, el 36% de todas las PoC encuestadas había recibido la vacuna contra COVID-19, y el 78% reportó ser elegible para recibirla. Más del 80% de las personas encuestadas cree que las vacunas son seguras

⁹ Roser, M., et al. (2021). “[Coronavirus Pandemic \(COVID-19\)](#)”(disponible en inglés). Recuperado el 16 de diciembre de 2021. N.B.: Las pruebas limitadas y los desafíos en la atribución de la causa de muerte significan que el número de casos confirmados y muertes es probablemente menor que el número real de casos y muertes por COVID-19.

y efectivas, y entre las que tienen la intención de vacunarse, el 71% dice que lo haría para protegerse. El gráfico 3 muestra cómo en los tres grupos de PoC, las tasas de vacunación reportadas son 13-18 pp más altas para las personas encuestadas venezolanas. Las actitudes hacia la vacuna contra COVID-19 no varían mucho según el origen nacional, aunque las personas nicaragüenses reportan ser un poco más reacias a vacunarse. Las personas encuestadas que reportan no querer recibir ninguna vacuna contra COVID-19 citan una variedad de preocupaciones, pero las más comunes se relacionan con la seguridad y la eficacia de la vacuna en sí. En consideración al costo como barrera principal, el 13% de las personas encuestadas no vacunadas dice que no se vacunaría contra la COVID-19 incluso si fuera gratuito.

Gráfico 3 Vacunación (ronda 2)

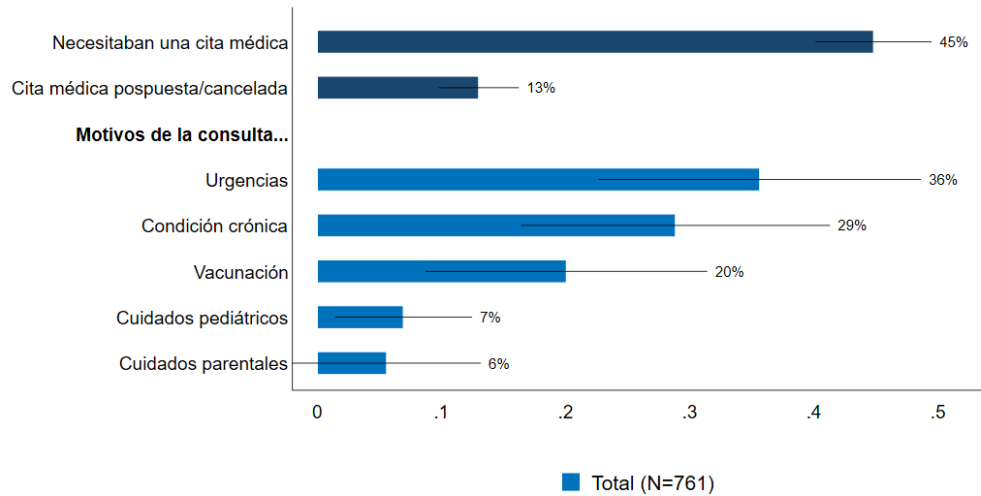


Acceso a la salud y la educación

Una de las principales preocupaciones de la pandemia y las restricciones posteriores ha sido el acceso limitado a los servicios básicos. Con respecto a las PoC, el 45% de las personas encuestadas dice que su hogar necesitaba una cita médica entre junio y agosto, y de ellas, un 13% tuvo que retrasar o cancelar la cita. Esta cifra es ligeramente superior al 5% de los hogares nacionales que no pudieron obtener una cita según el Banco Mundial en 2020, lo que podría reflejar un acceso relativamente menor de los hogares de las PoC a los servicios de salud. Si bien no hay diferencias claras en el acceso a la atención médica entre los tres grupos de PoC, las personas encuestadas provenientes de Venezuela son menos proclives, que los otros dos grupos, a creer que el Gobierno proporciona atención médica sin discriminación.

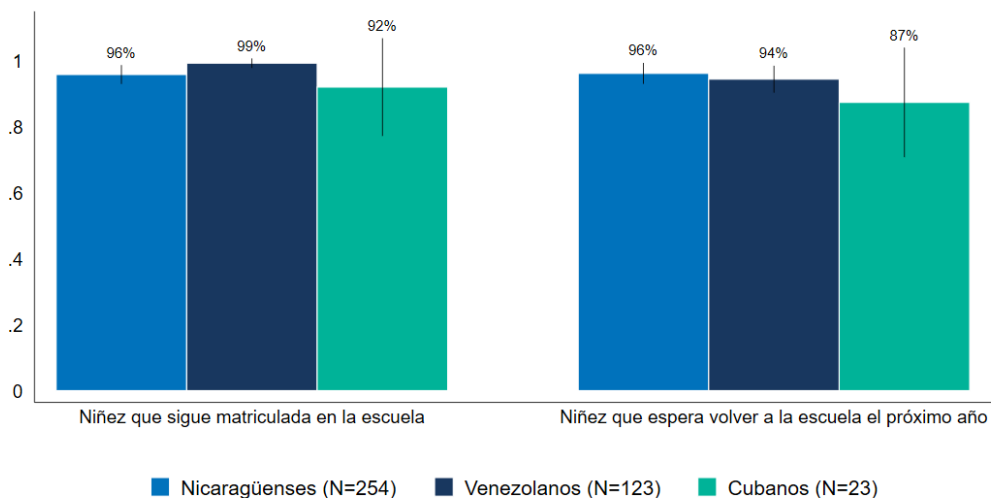
El gráfico 4 ilustra cómo la mayoría de estas citas médicas fueron para emergencias de salud o enfermedades crónicas que indican la gravedad del retraso o cancelación, y en menor medida, otras citas más rutinarias pero igualmente esenciales para vacunas, salud infantil y atención prenatal. De manera distinta, el acceso a la medicación entre los hogares de las personas de interés que manifestaron necesitarla se mantiene estable durante las dos rondas en un 80%. Aún así, esto representa 10 puntos porcentuales menos que el 90% reportado por los hogares nacionales en la encuesta del Banco Mundial en 2020. En los tres grupos de PoC, no hay diferencia significativa en el acceso a la medicación.

Gráfico 4 Acceso a los servicios de salud (ronda 2)



En cuanto a la educación, los cierres de escuelas representaron una perturbación importante para los hogares con niñas y niños en edad escolar. Sin embargo, para las niñas y niños inscritos en marzo de 2020 hay poca evidencia de abandonos extensivos. El gráfico 5 muestra cómo casi todos los menores de los 3 grupos de PoC separados siguen inscritos y participando en la escuela para agosto de 2021, y se espera que aquellos que no han regresado físicamente, lo hagan en el próximo año. Sin embargo, se percibe que la calidad de la escuela es peor desde que comenzó la pandemia y se impusieron los cierres de escuelas. Cerca de la mitad de todas las personas encuestadas consideran que la calidad de la escuela era mala o muy mala en agosto de 2021, en comparación con solo un 15% antes de marzo de 2020. Los desafíos en torno al aprendizaje a distancia son probablemente la razón principal, en particular para los hogares nicaragüenses que reportan menos acceso a internet y otros recursos informáticos como las computadoras portátiles. Como resultado, los hogares nicaragüenses prefieren la comunicación con las escuelas y maestros a través de otros medios como WhatsApp, mientras que los hogares venezolanos probablemente prefieren las aplicaciones de enseñanza en línea a las que normalmente se accede a través de una computadora.

Gráfico 5 Matrícula escolar (ronda 2)



Medios de vida e inseguridad financiera

Si bien los impactos de la pandemia en la salud tienen una importancia de primer orden, la pandemia también ha tenido un gran costo económico. Según el instituto nacional de estadística de Costa Rica, cerca de uno de cada cuatro trabajadores estaba desempleado a mediados de 2020, con un aumento de la pobreza entre los más vulnerables.¹⁰ Las cifras más recientes muestran cómo la tasa de desempleo se ha recuperado modestamente, estimada actualmente en 14.4%, sin embargo, aún no ha alcanzado los niveles anteriores a la pandemia.¹¹ En este contexto, las dos rondas de encuestas telefónicas arrojaron luz sobre cómo las PoC del ACNUR se han visto afectadas por la pandemia con respecto a los medios de vida y la inseguridad financiera.



Empleo y fuentes de ingresos de baja confianza

Alrededor del 68% de todas las PoC encuestadas reportó tener empleo durante la segunda ronda, una mejora modesta con respecto a la primera ronda, y que es consistente en las áreas urbanas (GAM) y rurales (frontera norte). Este resultado es similar a la tasa de empleo del 73% reportada para las personas costarricenses en la tercera ronda de las HFPS del Banco Mundial en agosto de 2020. Aun así, las condiciones del mercado laboral empeoraron notablemente a lo largo de 2020 en comparación con el momento en el que se implementaron ambas rondas de esta encuesta, como lo ilustran las estadísticas oficiales de desempleo citadas anteriormente, lo que significa que en la actualidad es probable que haya una brecha más amplia entre las personas de interés y las nacionales si se asume una recuperación desigual. Además, aunque una proporción considerable de las PoC encuestadas dice que tiene empleo, 3 de cada 4 también reportan en la primera ronda que un miembro del hogar había perdido un trabajo desde que se implementaron las restricciones relacionadas con la pandemia en marzo de 2020, lo que refleja la fragilidad de la situación de los medios de vida de la mayoría de los hogares durante la crisis.

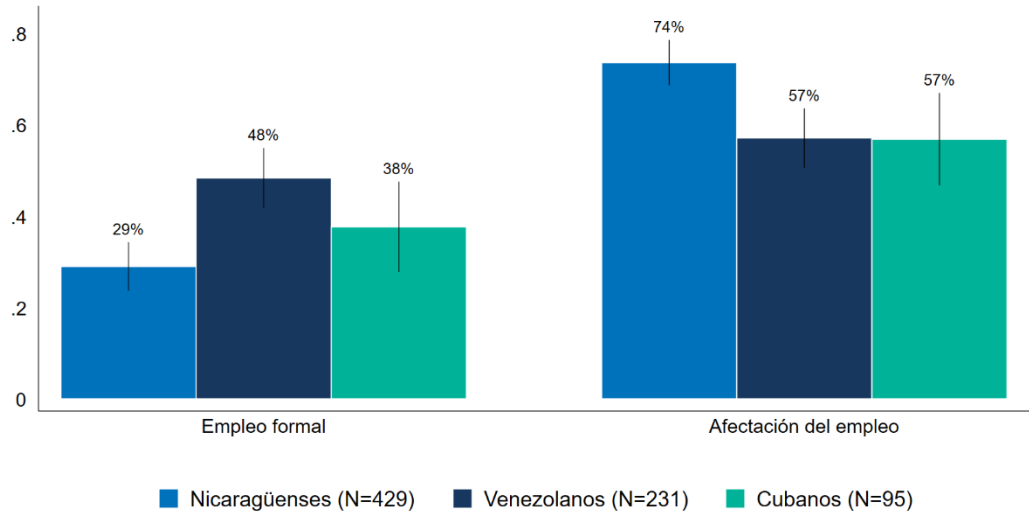
Analizando la información de los tres subgrupos de PoC, se observa que las personas venezolanas tienen tasas de empleo ligeramente más altas en comparación con las personas nicaragüenses y cubanas. Sin embargo, lo más llamativo es que las personas venezolanas tienen mayor probabilidad de contar con empleos formales que brindan acceso a la seguridad social, con una diferencia de casi 20 pp respecto a las personas nicaragüenses (gráfico 6). Además, los hogares nicaragüenses tienen muchas más probabilidades, que los otros dos grupos, de haber sufrido una afectación en su situación laboral en el periodo entre rondas lo que incluye la pérdida de empleo de un miembro del hogar, la suspensión de su contrato formal o la reducción de la jornada laboral.

Esta diferencia general entre personas venezolanas, cubanas y nicaragüenses se mantiene al observar varias medidas en nuestros datos, y probablemente refleja el mejor perfil socioeconómico de la población venezolana que ha logrado integrarse a la sociedad costarricense. Por ejemplo, una proporción mucho mayor de las personas encuestadas venezolanas ha completado la educación secundaria o universitaria (62%), en relación con las personas cubanas (45%) y las nicaragüenses (15%). Asimismo, las tasas de afectación laboral son generalmente más altas para la población con niveles más bajos de educación completada.

¹⁰ INEC (2020). [ECE. II Trimestre 2020. Comparación interanual. Población nacional según indicadores generales de la condición de actividad.](#)

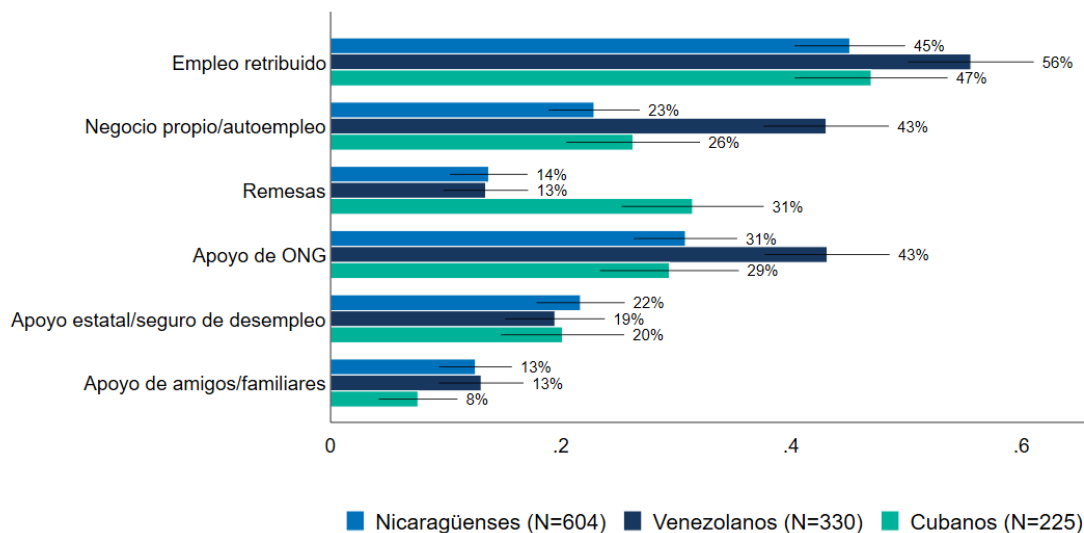
¹¹ INEC (2021). [ECE. SON Trimestre 2021. Comparación interanual. Población nacional según indicadores generales de la condición de actividad.](#)

Gráfico 6 Empleo formal y afectación del empleo (ronda 2)



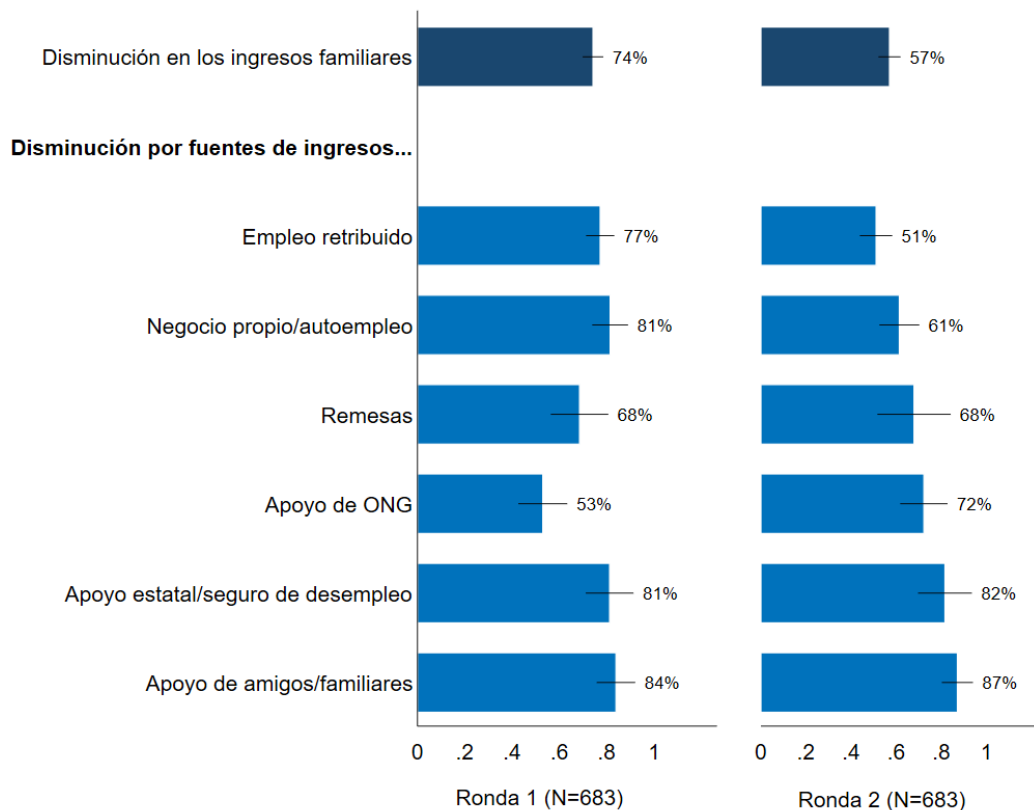
La mayoría de las personas encuestadas (60%) indica que su hogar depende de múltiples fuentes de ingresos que ayudan a amortiguar una pérdida inesperada de empleo. De nuevo, existen diferencias significativas entre los subgrupos en lo que respecta al tipo de fuentes de ingresos. El gráfico 7 muestra que las PoC venezolanas son considerablemente más propensas a recibir salarios e ingresos de negocios que las PoC nicaragüenses y, en menor medida, las cubanas, lo que es consistente con los hallazgos anteriores relacionados con el empleo. Los hogares venezolanos también tienen muchas más probabilidades de contar con el apoyo de alguna ONG, fundaciones o la iglesia, lo que puede indicar una fuerte respuesta a la situación venezolana en Costa Rica. Por otro lado, los hogares cubanos tienen dos veces más probabilidades de recibir remesas en comparación con los otros dos grupos, lo que sugiere fuertes vínculos con los miembros de la familia en su país de origen o en un tercer país como Estados Unidos, y tal vez la adopción de la migración como una estrategia de los hogares para diversificar las fuentes de ingresos.

Gráfico 7 Fuentes de ingresos en los últimos 12 meses (ronda 1)



Más allá de la fuente de ingresos, el gráfico 8 destaca la pérdida de ingresos desde que se implementaron por primera vez las medidas relacionadas con la pandemia en marzo de 2020. Casi 3 de cada 4 personas encuestadas reportan una reducción en el ingreso familiar total en la primera ronda en comparación con los tiempos anteriores a la pandemia de COVID-19, mientras que otro 57% reporta una reducción en la segunda ronda en comparación con la ronda anterior. La primera es comparable, pero ligeramente superior a las HFPS del Banco Mundial, ya que el 63% de los hogares nacionales menciona una reducción en los ingresos totales durante los primeros meses de la pandemia. Quizás sea más interesante conocer con exactitud las fuentes de ingresos que han disminuido para los hogares de las PoC. Se observa que las personas encuestadas tienen 20-25 pp más de probabilidades de reportar una disminución en los ingresos de la empresa familiar o el trabajo por cuenta propia y el empleo asalariado en la primera ronda en comparación con la segunda ronda. Por el contrario, en la segunda ronda, es mucho más probable que disminuyan los ingresos de las ONG, las fundaciones o las iglesias en comparación con la primera ronda. Este cambio en las rondas parece reflejar los cierres de negocios y la pérdida de empleos en las primeras etapas de la pandemia, que el apoyo de las ONG y otras redes sociales ayudó a mitigar hasta que el mercado laboral comenzó a recuperarse.

Gráfico 8 Disminución de ingresos desde el comienzo de la pandemia/última ronda



Inseguridad financiera

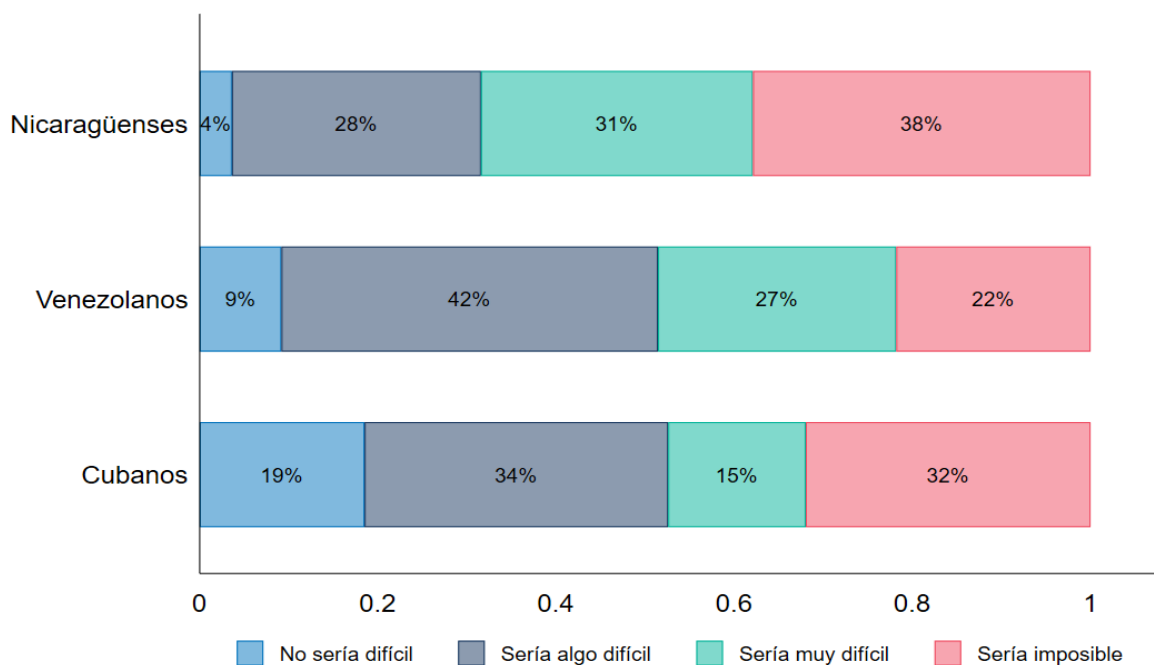
Los datos ilustran cómo el nivel de preocupación por el impacto económico de la pandemia sigue siendo alto. Más de la mitad de todas las PoC encuestadas comentan que sienten que las circunstancias económicas de su hogar están "muy amenazadas" por la crisis. Esto no es sustancialmente diferente del 39-47% de las personas

costarricenses de la encuesta HFPS del Banco Mundial en 2020 que indicaron que estaban muy preocupadas por la amenaza financiera de la pandemia, sin embargo, el hecho de que la ansiedad se mantiene alta con el tiempo refleja los impactos a largo plazo en la salud mental.

Parte de esta preocupación se debe al nivel de inseguridad financiera que enfrentan los hogares de las personas de interés, a menudo a la luz del riesgo de pérdida de empleo ilustrado anteriormente. La mitad de todas las personas encuestadas reportan que no tienen cuenta bancaria o de ahorro móvil, incluyendo el 59% de los hogares de las PoC en áreas rurales. De los tres subgrupos, el de PoC nicaragüenses es, por mucho, el que tiene menos probabilidades de tener una cuenta. No es de extrañar que casi todas las personas que no tienen una cuenta digan que les gustaría tenerla, y el 15% afirma que carece de la documentación necesaria.

La inseguridad financiera de un hogar sobresa más cuando se enfrenta a una emergencia. Al preguntar a las personas encuestadas si podrían reunir 50.000 colones (unos 80 dólares estadounidenses) en fondos de emergencia en los próximos 30 días, alrededor de dos tercios comenta que sería "muy difícil" o "imposible". En todos los subgrupos, las PoC nicaragüenses son considerablemente más propensas a decir que sería "muy difícil" o "imposible" en relación con los otros dos grupos (gráfico 9). En caso de necesidad, las redes sociales, incluyendo familiares, parientes o amistades, son las fuentes más comunes de fondos de emergencia, sin embargo, es menos probable que las personas que cuentan con un mayor acceso a fondos de emergencia necesiten depender de las conexiones sociales, y es más probable que se refieran al dinero del trabajo y los ahorros. Como es de esperar, las PoC nicaragüenses tienen más probabilidades de depender de las conexiones sociales cuando se enfrentan a una emergencia, y menos probabilidades de utilizar los salarios y los ahorros.

Gráfico 9 Capacidad de conseguir dinero para enfrentar una emergencia en 30 días (ronda 2)



Más allá de la supuesta emergencia, el 70% de todas las PoC encuestadas reportan que se ven obligadas a agotar sus ahorros o a depender de otros para satisfacer las necesidades diarias básicas, como la alimentación y la atención médica, en el periodo entre las dos rondas de encuestas. Las PoC cubanas son las menos propensas a reportar dificultades en comparación con las venezolanas y las nicaragüenses (55% frente a 66% y

72%, respectivamente). El método de supervivencia más común cuando se enfrentan a tal desafío incluye pedir dinero prestado (29%), buscar ayuda de amistades y familiares (23%) y agotar los ahorros (16%). Las personas encuestadas nicaragüenses son particularmente más propensas a endeudarse por no poder satisfacer las necesidades básicas diarias, así como por haber buscado el apoyo de amistades y familiares.

Inseguridad alimentaria y asistencia

Como era de esperarse teniendo en cuenta el impacto económico de la pandemia, la pérdida de actividades generadoras de ingresos ha colocado a muchos hogares en una situación precaria. Para las poblaciones desplazadas que ya dependen en gran medida de la economía informal, las medidas para frenar la propagación de la enfermedad han tenido un impacto desproporcionado en los medios de vida y han provocado graves dificultades para satisfacer las necesidades básicas que requieren asistencia específica.



Inseguridad alimentaria

Al preguntar a las PoC encuestadas sobre tres alimentos esenciales para su hogar, la Tabla 1 muestra que el acceso a esos alimentos ha aumentado alrededor de 8 pp en todas las rondas, lo que refleja una modesta mejora en el mercado local. Los alimentos más comunes mencionados son los granos (por ejemplo, arroz), las legumbres (por ejemplo, frijoles) y las proteínas (por ejemplo, pollo). Sin embargo, siguen existiendo diferencias considerables entre los grupos, ya que las personas nicaragüenses y cubanas tienen más probabilidades de reportar dificultades para comprar o abastecerse de esos artículos esenciales en comparación con las personas venezolanas. Considerando que la gran mayoría de las personas encuestadas dice que la falta de dinero es la razón principal para el acceso limitado, esto es un claro reflejo del mejor perfil socioeconómico que poseen las personas venezolanas en comparación con los otros dos grupos.

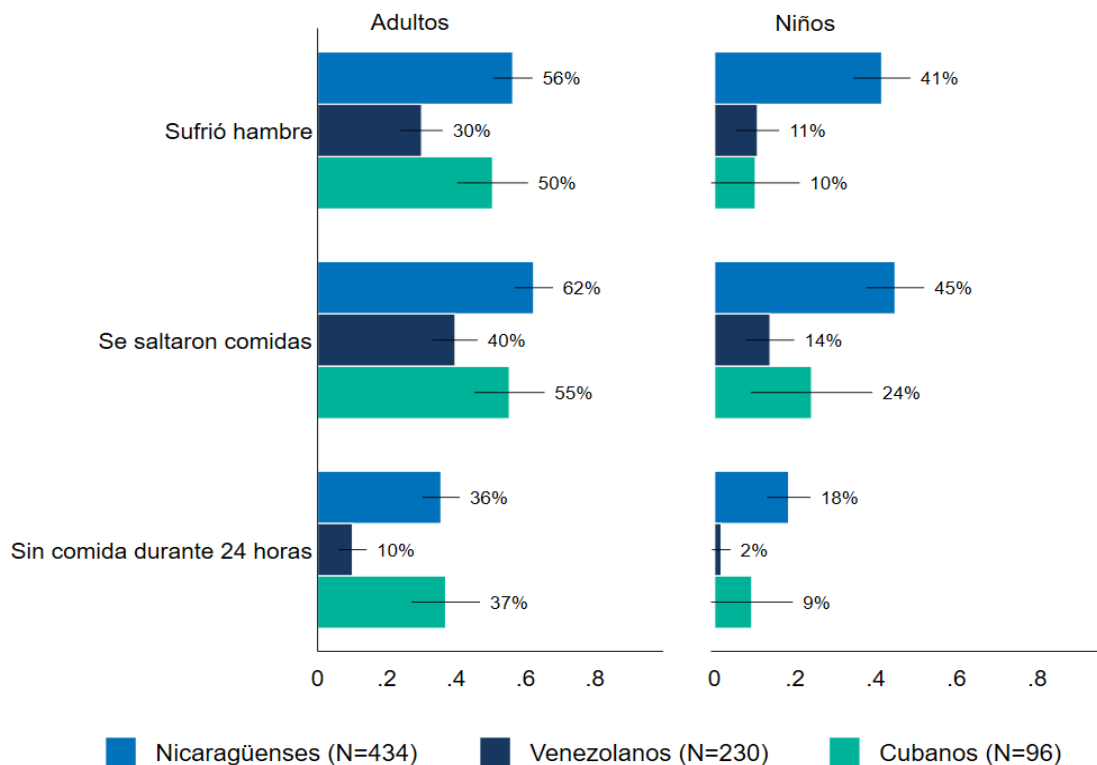
Tabla 1 Capacidad de adquirir/almacenar tres tipos de alimentos esenciales (%)

	Ronda 1	Ronda 2
Nicaragüenses	57.9	64.3
Venezolanos	65.0	83.7
Cubanos	59.1	66.1
Total	58.9	66.9

Considerando el acceso relativamente limitado a los alimentos esenciales, se deduce que la inseguridad alimentaria entre las personas de interés sigue siendo alta. A pesar de que nuevamente se observa una mejora entre las rondas de encuestas, más de la mitad de todas las personas encuestadas todavía reporta que su hogar se quedó sin alimentos en agosto. Los hogares nicaragüenses en particular tienen 17 pp y 27 pp más de probabilidades que los hogares cubanos y venezolanos, respectivamente, de reportar quedarse sin alimentos en los 30 días previos a la enumeración (69% frente a 52% frente a 42%). El gráfico 10 ilustra cómo las personas venezolanas parecen estar mejor en casi todas las mediciones de inseguridad alimentaria, incluyendo notablemente a la población adulta que se quedó sin alimentos en las últimas 24 horas. En 2020, la encuesta del Banco Mundial aplicada en la población costarricense encontró tasas mucho más bajas de inseguridad alimentaria en las personas adultas, lo que destaca la disparidad entre las personas de interés y las nacionales, reportando estas últimas los siguientes datos: 23% se quedó sin alimentos, 17% se saltó una comida y 5% pasó un día completo sin alimentos.

El gráfico 10 también muestra que la inseguridad alimentaria entre las niñas y niños es un problema grave, particularmente en la población nicaragüense. Alrededor de 4 de cada 10 personas encuestadas nicaragüenses reportan que una niña o niño pasó hambre en los 30 días previos a la enumeración debido a la falta de dinero u otros recursos, en comparación con solo alrededor de 1 de cada 10 personas encuestadas venezolanas y cubanas. Lo que es más sorprendente aún, cerca del 20% de las personas encuestadas nicaragüenses reportan a una niña o niño sin comida durante 24 horas en los últimos 30 días, en comparación con la mitad de las personas cubanas y solo un 2% de las venezolanas. Es importante destacar que las niñas y niños que reciben alimentos en la escuela aumentaron del 1% al 39% entre rondas, lo que refleja la reapertura de las escuelas, así como la importancia de las comidas escolares para satisfacer las necesidades básicas.¹²

Gráfico 10 Inseguridad alimentaria (ronda 2)



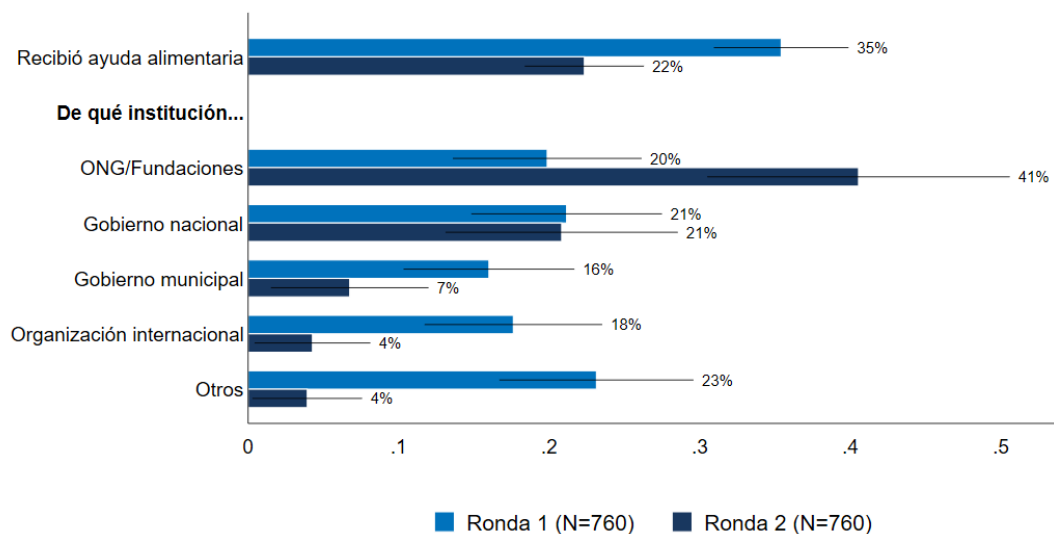
 **Asistencia**

Como lo demuestra la pertinencia de las comidas escolares, la asistencia alimentaria es esencial para las personas vulnerables a la inseguridad alimentaria. Sin embargo, el gráfico 11 muestra cómo la ayuda alimentaria para las personas de interés, por ejemplo, una comida gratuita o un cupón para intercambiar por comidas, disminuye 13 puntos porcentuales entre rondas. Si bien esa disminución puede reflejar una mejora en la situación

¹² Ver Borkowski et al. (2021). Ver [“COVID-19: Missing More Than a Classroom. The impact of school closures on children’s nutrition”](#) para obtener más información sobre cómo se han interrumpido los programas de alimentación escolar durante la pandemia (disponible en inglés).

con el tiempo y, por lo tanto, una menor necesidad, los resultados anteriores destacan cómo más de la mitad de todas las PoC encuestadas aún reportan que sus hogares se quedaron sin alimentos en agosto de 2021, lo que respalda el argumento de que sigue siendo necesaria una asistencia amplia. El gráfico 11 también indica que para la segunda ronda las ONG y las fundaciones están llenando un vacío debido a los recortes de los gobiernos municipales, las organizaciones internacionales y otras fuentes, mientras que el apoyo del gobierno nacional se mantiene constante en el tiempo. En todos los grupos, se ha demostrado que las PoC venezolanas han recibido una proporción relativamente mayor de ayuda alimentaria en la primera ronda de la encuesta, pero también experimentan la mayor caída entre rondas. Para agosto, la población venezolana estaba recibiendo niveles similares a los de los hogares nicaragüenses y cubanos. En todas las localidades, los hogares nicaragüenses ubicados en la región norte recibieron 9 pp menos de ayuda alimentaria que los nicaragüenses ubicados en GAM, lo que refleja las disparidades geográficas en términos de asistencia.

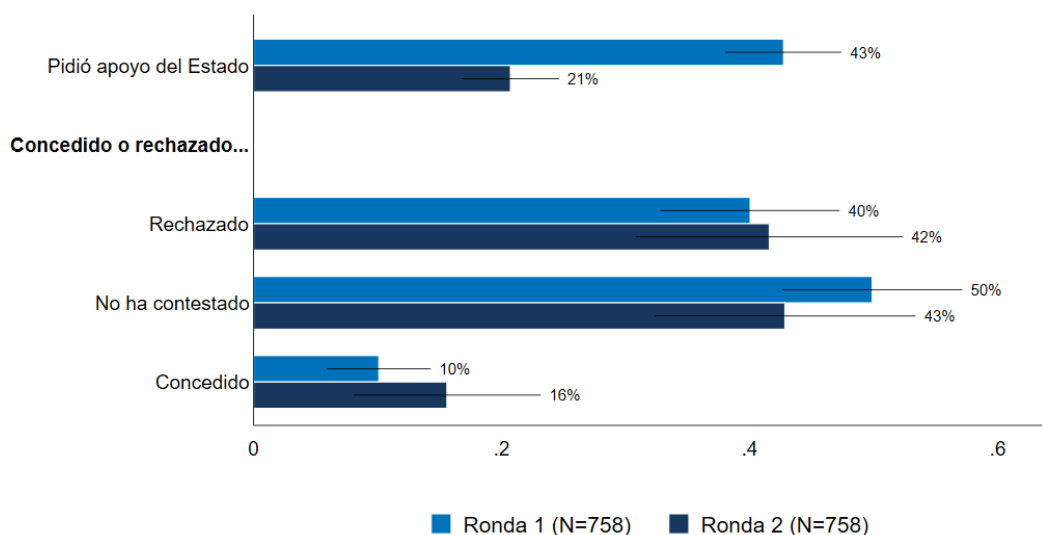
Gráfico 11 Asistencia alimentaria (ambas rondas)



Más allá de la asistencia alimentaria, en la primera ronda, cerca de 1 de cada 3 personas encuestadas reporta que sus hogares reciben ayuda financiera directa en forma de efectivo, cheque o transferencia electrónica. Sin embargo, de nuevo hay una caída notable en la asistencia de marzo a agosto, únicamente el 12% de las PoC recibieron ayuda monetaria en la segunda ronda. Hay poca diferencia entre los tres grupos. La cantidad promedio recibida es de alrededor de 260.000 colones (unos 400 dólares estadounidenses), y procede principalmente de las organizaciones internacionales y las ONG. En comparación, la encuesta del Banco Mundial en 2020 encontró que 33% de los hogares nacionales habían recibido recientemente alguna forma de asistencia estatal.

El gráfico 12 ilustra cómo en la segunda ronda una menor cantidad de las PoC encuestadas reporta haber solicitado apoyo estatal desde la primera ronda en comparación con los seis meses anteriores a la primera ronda. Alrededor del 40% de las solicitudes de apoyo estatal son rechazadas, y la gran mayoría de las otras aún están pendientes, y hay poca diferencia en las tasas de aceptación entre los tres grupos de PoC. En 2020, la encuesta del Banco Mundial encontró que 37% de los hogares costarricenses solicitaron apoyo estatal, de los cuales solo el 13% fue rechazado.

Gráfico 12 Apoyo estatal (ambas rondas)



Reflexiones finales

La crisis provocada por la COVID-19 ha complicado la situación de desplazamiento en Costa Rica. En Centroamérica, en términos más generales, las dificultades asociadas con la inseguridad y los desplazamientos internos a gran escala requieren la participación y el apoyo continuos de los socios humanitarios y para el desarrollo. Del mismo modo, el rápido aumento de las llegadas de personas nicaragüenses, venezolanas y, más recientemente, haitianas, entre otros grupos, exige una visión plurianual en la búsqueda de soluciones sostenibles.

Las repercusiones sanitarias y económicas de la pandemia, junto con los efectos de las medidas de mitigación, han supuesto una carga considerable para toda la población, incluyendo las personas de interés del ACNUR. Los *shocks* en la demanda, las restricciones a la circulación y los cierres han contribuido a una pérdida significativa de bienestar económico y han reducido la resiliencia de muchos grupos ya vulnerables. Si bien el ACNUR continúa su proceso de transición de la asistencia en especie a la ayuda en efectivo y la inclusión económica; la crisis de la pandemia, el aumento de los precios de los alimentos y la disminución de los empleos hacen que esa transición sea cada vez más difícil. Los enfoques mixtos, como la ayuda en efectivo y de medios de vida, son necesarios para garantizar que se satisfagan las necesidades básicas inmediatas al tiempo que se fomenta una mayor autosuficiencia.

Más allá de las respuestas específicas del ACNUR y sus socios, la recuperación mundial continúa, pero con una incertidumbre significativa vinculada al acceso a las vacunas, la propagación continua de enfermedades y las interrupciones del suministro. Las perspectivas del mercado laboral para personas trabajadoras poco calificadas y la juventud son relativamente sombrías en comparación con otros grupos demográficos, lo que apunta a una creciente desigualdad y un mayor riesgo de que los hogares caigan por debajo de la línea de pobreza extrema.¹³ En Costa Rica, los impactos negativos de la pandemia continúan propagándose a través de la economía a pesar de que el mercado laboral se ha recuperado parcialmente de lo peor de 2020. No obstante, el país ha seguido ofreciendo asilo a las personas necesitadas, acogiendo al mayor número de personas solicitantes de asilo,

¹³ Fondo Monetario Internacional (2021). “[Perspectivas de la Economía Mundial](#)”, octubre de 2021.

refugiadas y otras personas necesitadas de protección internacional en 30 años. Este aumento rápido del número de personas de interés del ACNUR, – que en la actualidad equivale a cerca del 3% de la población total – subraya la importancia de los enfoques por zonas que benefician tanto a las comunidades de acogida como a las poblaciones desplazadas con el fin lograr soluciones humanitarias y orientadas al desarrollo.

Un componente esencial de cualquier estrategia de recuperación robusta deberá incluir la aplicación de las vacunas en todos los países y para todos los sectores de la sociedad. En la actualidad, alrededor de 120 países se han comprometido a incluir a las poblaciones desplazadas en sus planes nacionales de vacunación. Aumentar ese número para garantizar que todas las personas de interés del ACNUR tengan la opción de recibir una vacuna segura, ayudará a frenar la propagación del virus y minimizará el daño socioeconómico ya infligido a algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo. Del mismo modo, mayores esfuerzos para incluir sistemáticamente a las personas refugiadas y otros grupos de personas de interés en los sistemas nacionales de protección social fortalecidos ayudarán a los hogares vulnerables durante la pandemia de COVID-19 en curso, así como las crisis futuras.

Por último, la pandemia ha puesto de relieve la necesidad fundamental de contar con datos socioeconómicos oportunos en los contextos de desplazamientos para comprender plenamente las condiciones de las personas que se encuentran bajo la protección del ACNUR y sustentar las respuestas programáticas y políticas adecuadas. En los casos en que los institutos nacionales de estadística no incluyan de manera metódica a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras personas de interés del ACNUR en los sistemas nacionales de datos, será necesario realizar tareas de recolección de datos por separado. El Centro Conjunto de Datos sobre el Desplazamiento Forzado del Banco Mundial y el ACNUR se estableció para abordar estos vacíos de información, así como para promover la inclusión de las poblaciones desplazadas en los sistemas estadísticos nacionales de manera más amplia; su inversión en las encuestas de hogares realizadas durante la pandemia ha sido muy importante para revelar el deterioro de las condiciones tanto de las poblaciones desplazadas por la fuerza como de las poblaciones de acogida. Los hallazgos presentados en esta nota construyen la base de conocimientos y proporcionan más evidencia sobre el impacto de la COVID-19 en las poblaciones desplazadas en una región que anteriormente no estaba cubierta, y ayudan a garantizar que nadie se quede atrás.¹⁴

¹⁴ Tanner, J., et al. (2021). [Answering the Call: Forcibly Displaced during the Pandemic](#) (disponible en inglés).